

Revista Crítica Penal y Poder

2019, n° 16

Marzo (pp. 75-98)

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos

Universidad de Barcelona



EL ACUERDO ENTRE NORUEGA Y COLOMBIA PARA PROTEGER LOS BOSQUES TROPICALES Y REDUCIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL: ¿ÉXITO O FRACASO?

THE NORWAY-COLOMBIA AGREEMENT TO PROTECT RAINFOREST AND REDUCE GLOBAL WARMING: SUCCESS OR FAILURE?

Ragnhild Sollund

Universidad de Oslo

Angela M Maldonado

Fundación Entropika-Colombia

Claudia Brieva Rico

Universidad Nacional de Colombia

RESUMEN

El gobierno noruego firmó un acuerdo con Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, para otorgarle a este país USD \$48 millones anuales para reducir la deforestación. Este acuerdo forma parte de un esfuerzo mayor de Noruega para apoyar a los países del sur que busca detener el cambio climático, a través de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI, por sus siglas en inglés: Norwegian International Climate and Forest Initiative) instituida después del Acuerdo de París en 2015. La manera en que se han implementado los esfuerzos para reducir la deforestación ha sido recibida con críticas. Por ejemplo, Colombia ratificó el Acuerdo de París para llegar a deforestación neta cero en 2020. No obstante, en 2016 la deforestación en la selva amazónica aumentó en un 44%. Mientras Noruega, a través de esta inversión en el bosque, parece ser un país preocupado por el clima, también continúa realizando extracción de petróleo. Noruega, por lo tanto, exhibe estándares dobles ya que apunta a mantener su posición como un importante productor de extracción de petróleo y gas en alta mar, al tiempo que impulsa el problema del cambio climático a los países del sur. De esta manera, Noruega parece cumplir con los requisitos del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de CO₂. Este artículo examina los éxitos y fracasos de los esfuerzos noruegos de protección de los bosques

tropicales en el caso de Colombia, evaluando la gobernanza de las políticas de deforestación desde la perspectiva de la criminología verde del sur, e incorporando una crítica a los medios neocolonialistas de protección ambiental establecidos por el norte.

Palabras clave: protección de los bosques tropicales, NICFI, protección ambiental neo-imperialista, corrupción, criminología verde

ABSTRACT

The Norwegian government has made an agreement with Juan Manuel Santos, the former Colombian president, to give Colombia USD \$48 million yearly in order to reduce deforestation. This forms part of a greater support effort by Norway to countries in the South to halt climate change, through the Norwegian International Climate and Forest Initiative (NICFI) instituted after the Paris Agreement in 2015. The way in which efforts to reduce deforestation have been implemented has, however, been met with criticism. For instance, Colombia ratified the Paris Agreement to reach zero net deforestation by -2020. Nonetheless, in 2016, deforestation in the Amazon rainforest increased by 44%. While Norway, through this investment in the forest, gives the appearance of being a climate concerned country, it also continues oil extraction. Norway thus exhibits double standards as it aims to maintain its position as an important producer of offshore oil and gas extraction, while pushing the problem of climate change onto the countries in the South. In this way, Norway is able to comply with the Paris Agreement requirements for reduction of CO2 emissions. This article examines the successes and failures of the Norwegian rainforest protection efforts in the case of Colombia, assessing the governance of the deforestation policies from the perspective of green Southern criminology and incorporating a critique of the neo-colonialist means of environmental protection established by the North.

Key words: rainforest protection, NICFI, neo-imperialist environmental protection, corruption, green criminology

Introducción

Noruega, un país rico en el extremo norte de Europa, tiene la reputación de preocuparse por la paz mundial, la ayuda humanitaria y la protección del medio ambiente. En parte, esta reputación se ganó a través del papel que jugó Noruega en las negociaciones de paz, tanto en el conflicto de Israel y Palestina, como en el de Colombia, y por grandes contribuciones a la ayuda humanitaria en todo el mundo. Según lo declarado por Tvedt (2007, p. 615): “Durante un período en el que el proceso de globalización está obligando a todas las naciones a redefinir su posición, el liderazgo político [en Noruega] ha vinculado la 'marca

del estado' nacional e internacional de Noruega en su desarrollo y políticas de paz en la escena global". Noruega es responsable del Premio Nobel de la Paz, que en 2016 fue otorgado al ex presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Según el gobierno noruego, la contribución de Noruega al acuerdo de paz en Colombia y al programa de protección de la selva tropical (NICFI) en el país van de la mano y se apoyan mutuamente (Norges internasjonale klima- og skoginitiativ 2015, p. 18). Si bien Noruega contribuye en gran medida al calentamiento global al ser un país productor de petróleo y gas¹, también ha contribuido significativamente a la protección de la selva tropical en varios países del Sur global y metafórico (Goyes 2017; Carrington et al. 2016), como Tanzania, un país que durante décadas ha recibido ayuda humanitaria de Noruega, y Brasil, Perú, República Democrática del Congo y, más recientemente, Colombia².

Comenzamos presentando la declaración conjunta de intención entre Noruega y Colombia, luego situamos el artículo teóricamente, antes de describir el NICFI desde el punto de vista del historial de ayuda humanitaria de Noruega. Continuamos presentando las críticas formuladas contra el NICFI para elaborar un panorama que permita examinar a Colombia como un caso empírico, con un enfoque especial en las iniciativas perversas, como por ejemplo, aquellas relacionadas con las medidas tomadas para reducir los cultivos ilícitos. ¿Es el NICFI una política efectiva de desarrollo y protección forestal, o es más bien un ejemplo de políticas neocolonialistas / imperialistas infructuosas con una mala gobernabilidad en un país receptor como Colombia? Para responder a esta pregunta, analizamos los resultados proporcionados por el gobierno colombiano para cumplir con los requisitos para obtener fondos adicionales de Noruega, y el alcance real de esta colaboración. También presentamos las acciones tomadas por la sociedad civil para exigir transparencia y efectividad del gobierno colombiano a la luz de la creciente tasa de deforestación en la Amazonía.

El caso de Colombia: la Declaración Conjunta de Intención

Después de la Conferencia de las Partes (COP) de 2009 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde Colombia presentó el ambicioso objetivo de alcanzar la deforestación neta cero³ en la Amazonía colombiana para el año 2020, Colombia se comprometió nuevamente a alcanzar este objetivo durante la COP de 2015 en París. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018 (Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2015), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se encargó de diseñar e implementar la estrategia nacional

¹ Noruega se encuentra entre los principales productores de petróleo y gas del mundo, y satisface el 20% de las necesidades de gas de Europa. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=16311>

² <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/colombia/id2464811/>

³ Deforestación Neta Cero se refiere a la relación entre las pérdidas de bosque y la reforestación, restauración o regeneración natural, entre otras. Para llegar la meta de deforestación neta cero la suma de esta relación, es decir lo que se deforestó o lo que restauró, regeneró o reforesto debe ser igual a cero (<http://visionamazonia.minambiente.gov.co/preguntas-frecuentes/>).

para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques o REDD+⁴, en coordinación con otros ministerios, entidades públicas y el sector privado, en el marco de la política nacional de cambio climático (Ley 1753, 2015). Así, en 2016, el MADS, con el apoyo técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre otros, diseñó un proyecto integral denominado Visión Amazonía (Amazon Vision). Se esperaba que este programa fuera un modelo de desarrollo regional innovador que apuntara a capacitar a la población local para enfrentar desafíos de conservación como el cambio climático, la deforestación tropical y la seguridad alimentaria (MADS 2017). Los principales impulsores de la deforestación identificados por Visión Amazonía fueron la expansión a gran escala de la ganadería extensiva, la agroindustria y la ocupación de tierras. Además, los informes proporcionados por organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ideas para la Paz (FIP) afirman que los cultivos ilegales han aumentado exponencialmente. El cultivo de coca creció de 48,000 hectáreas en 2012 a 146,000 hectáreas en 2016 (FIP 2018; UNODC 2017).

Prevenir la deforestación es importante no solo para reducir el calentamiento global. El último Planet Index Report (Reporte Índice del Planeta, WWF, 2018) muestra una disminución general del 60% de las poblaciones de especies vertebradas entre 1970 y 2014. Las disminuciones de la población de especies animales son especialmente pronunciadas en los trópicos, presentando la disminución más dramática en América del Sur y Central, con un 89% de pérdida en comparación con el año 1970. Si bien la deforestación implica la pérdida de medios de subsistencia y un detrimento real y simbólico para los humanos, para los no humanos implica la pérdida de hábitats, hambre y extinción de especies, que también es urgente considerar desde una perspectiva de eco-justicia no especista (White 2013).

Los recursos financieros asignados para alcanzar la meta de “Deforestación neta cero” de Colombia han sido proporcionados por los gobiernos de Noruega, el Reino Unido y Alemania, a través del Programa REDD + Early Movers (REM) y el Fondo de Biocarbono del Banco Mundial. En virtud de la Declaración Conjunta de Intención (JDI) firmada por el Gobierno de Colombia y los gobiernos antes mencionados durante la COP de París en 2015, los cuatro países acordaron los siguientes objetivos para esta asociación: Primero, contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. En segundo lugar, contribuir al logro de los objetivos nacionales de: i) reducir la deforestación anual en Colombia a 90,000 hectáreas o menos para 2018; ii) alcanzar deforestación neta cero en la Amazonía colombiana para 2020; iii) restaurar 210,000 hectáreas adicionales entre 2015 y 2018, con el objetivo de establecer procesos de restauración para 200,000 hectáreas más para 2020; iv) esforzarse por terminar con la pérdida de bosques naturales para 2030. En tercer lugar, contribuir al

⁴REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) (<https://www.unredd.net/about/what-is-redd-plus.html>), involucra medidas hechas en países "en desarrollo". El + se ha ido agregando gradualmente para marcar la adición de otros objetivos, como la protección del Medio ambiente, la gestión forestal sostenible o el almacenamiento de carbono en los bosques. (Benjaminsen and Svarstad 2018).

desarrollo sostenible de los sectores y comunidades rurales de Colombia mediante el apoyo a una transición hacia un desarrollo rural resiliente y bajo en carbono, y promover la cero deforestación en las cadenas comerciales de suministros, siendo todo ello lo que Colombia considera fundamental para asegurar una paz duradera. Y en cuarto lugar, trabajar juntos para promover los objetivos de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, y apoyar el progreso de los esfuerzos globales relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible en general, y el progreso de REDD + en particular (JDI 2015). Como consecuencia del acuerdo alcanzado entre Noruega, el Reino Unido, Alemania y Colombia, Noruega acordó dar a Colombia el total de 225 millones de USD hasta 2020, siempre que Colombia cumpliera con sus obligaciones. El programa Visión Amazonía de Colombia está adoptando varias reformas para alcanzar su objetivo de lograr la deforestación neta cero para 2020. Si Colombia tuviera éxito en esto, según el informe del gobierno noruego, esto anularía las emisiones anuales de Noruega (Norges internasjonale klima- og skoginitiativ 2016, p. 17–18). Esta es también una clara motivación para la iniciativa forestal de Noruega.

La asociación colombo-noruega funciona bajo dos modalidades: Modalidad 1: los países donantes aportan contribuciones económicas para el diseño, la implementación y la estructura de políticas que permitan la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y, por lo tanto, promueven una economía con bajas emisiones de carbono. Modalidad 2: los países donantes aportan contribuciones económicas para las reducciones de emisiones verificadas a nivel nacional. Las modalidades representan un enfoque de "pago por resultados" en el que Colombia es compensada por los esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono que resultan de la deforestación. En reconocimiento de estas reducciones, los países donantes están otorgando recursos financieros (hasta un total de 125 millones de USD entre 2016 y 2021) para desarrollar estrategias que permitan detener la deforestación y, por lo tanto, reducir las emisiones. Los informes sobre la reducción de las emisiones de carbono son evaluados por un tercero neutral (Norges internasjonale klima- og skoginitiativ 2015, p. 12). Antes de profundizar en el NICFI, presentamos el marco teórico.

Criminología Verde y del Sur

Este artículo toma su fundamento teórico de la criminología verde y criminología del sur. La criminología verde se ocupa de cuestiones de daño y justicia, ya sea para humanos, no humanos o ecosistemas (por ejemplo, Beirne y South 2007; Sollund 2008; White 2011, 2018).

Un tema importante que trata es cómo las instituciones poderosas, ya sean los estados o las grandes corporaciones, contribuyen a la degradación ambiental y la injusticia (por ejemplo, Beirne y South 2007; Stretesky et al. 2013; Sollund 2015). En gran medida, la criminología verde se ocupa de los delitos y daños ambientales que afectan al medio ambiente, mientras que el NICFI se dedica a proteger el medio ambiente mediante la *prevención* de la

deforestación y el cambio climático, y en consecuencia evita también el daño resultante a las especies humanas y no humanas, y la injusticia ecológica y ambiental. Sin embargo, debido a su crítica al poder, la criminología verde es una herramienta importante para comprender los éxitos y los fracasos del NICFI y para explorar cómo una iniciativa potencialmente fructífera puede tener deficiencias y efectos secundarios inherentes y desafortunados.

Una criminología del sur se define como una criminología transnacional que incluye las experiencias y perspectivas del sur global (Carrington et al. Hogg 2016). Tanto la criminología verde como la del sur están preocupadas por los problemas transnacionales (y eco-globales) (White 2011; Goyes 2017). El concepto de sur captura no solo las divisiones norte-sur, sino también la existencia de enclaves del sur dentro del norte, y de tensiones norte / sur no resueltas dentro de muchas sociedades (Hogg y Carrington 2016, p. 6). Esto es similar a la teoría estructural del imperialismo de Galtung (1971), en la cual el imperialismo es una "especie en un género de dominación y relaciones de poder" (...) y una "relación estructural general entre dos entidades" (Galtung, 1971, p. 81). El imperialismo, según Galtung, es un sistema que divide las colectividades y relaciona algunas de las partes entre sí en relaciones de *armonía de intereses*, y otras partes las relaciona con la *falta de armonía de intereses o conflicto de intereses* (op. Cit. P. 81). [Cursiva en original]. El imperialismo y el (neo) colonialismo son conceptos estrechamente entrelazados y relevantes para el presente caso. Mientras que "el colonialismo generalmente se entiende como una extensión de un país" que impone la soberanía de un territorio fuera de sus propias fronteras, el neocolonialismo es un concepto usado para describir una situación en la que un estado explota recursos en otro estado sin tomar control territorial (Fagerlund Knudsen et al. 2017; aquí, en Benjaminsen y Svarstad 2018, p. 26), tal como lo practica el norte global, mientras que las personas en el sur sufren las consecuencias del cambio climático (Brisman et al. 2018).

La relevancia de la criminología del sur para el tema del presente artículo se amplía por el hecho de que esta disciplina se refiere a temas de importancia vital para la investigación y política criminológica, no solo para y en el sur global, sino también para el norte global. También tiene implicaciones importantes para las relaciones sur / norte y para cuestiones de seguridad y justicia mundial (Carrington et al. 2016). Según lo declarado por Brisman et al. (2018, p. 2)⁵: "La criminología del sur y la criminología verde son reacciones poderosas contra el *statu quo* en la criminología y proporcionan puntos de vista desde los cuales reconsiderar las causas contemporáneas y la distribución de varias formas de desigualdad y explotación". Si bien la criminología del sur puede haberse preocupado más por la forma en que el norte (ya sea simbólico o geográfico) ha extraído y explotado los recursos del sur, en este artículo nos parece urgente explorar también las formas en que una iniciativa aparentemente bien intencionada como el NICFI, que garantiza que los recursos se agreguen en lugar de extraerlos (Stretesky et al. 2013), puede parecerse a la política y

⁵ Versión manuscrita.

práctica colonialista e imperialista anterior. Un tema que se discutirá es si las comunidades locales y periféricas del sur global pueden no solo estar extraordinariamente agobiadas por los efectos de la deforestación y el cambio climático (Brisman et al. 2018), sino también por las medidas adoptadas para contrarrestar dichos daños. Sin embargo, aunque reconocemos la dignidad del sur, en este caso el sur receptor, también tenemos en cuenta las responsabilidades relacionadas con la forma en que se utilizan los millones de la selva tropical en términos de la gobernanza colombiana sobre los medios que recibe.

Ayuda contra el cambio climático, NICFI y ayuda humanitaria: ¿ruedas de un mismo vagón?

El gobierno noruego afirma que Noruega ha sido una fuerza impulsora para garantizar mecanismos de seguridad social y ambiental sólidos dentro del marco de REDD +, que se consideran particularmente importante para asegurar la participación de los grupos indígenas, proteger sus derechos y preservar la rica biodiversidad de los bosques (Norges internasjonale klima- og skoginitiativ 2015: 12). La base ideológica de la iniciativa implica que es más rentable implementar medidas climáticas en países de bajo costo que en países de alto costo como Noruega (Benjaminsen y Svarstad 2018; Hermansen y Kasa 2014).

El escenario para el NICFI fue una mayor demanda interna, a partir de 2006, para crear una política climática más proactiva (Hermansen y Kasa 2014). Dos ONGs ambientales noruegas, Rainforest Foundation Norway y Friends of the Earth Norway, aprovecharon la ventana de oportunidad que surgió de la tensión entre los altos costos internos de reducción de carbono y el aumento de las demandas internas para la creación de una política al respecto, y propusieron un esfuerzo a gran escala de Noruega en la selva tropical (Hermansen y Kasa 2014, p. 1). Noruega firmó un acuerdo con el gobierno brasileño en 2008, lo que convierte a Brasil en el mayor receptor de ayuda a través de REDD +. Brasil ha recibido cerca de 1.000 millones de dólares en ayuda forestal de Noruega (Riksrevisjonen 2018)⁶. Los pagos anuales de Noruega se transfieren al Fondo Amazonas (Birdsall et al. 2014). Según el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega, los proyectos apoyados por el Fondo contribuyen al plan general de Brasil para reducir la deforestación, así como al desarrollo sostenible en la región amazónica. El Fondo apoya 20 proyectos en muchas categorías diferentes y ha realizado acuerdos con autoridades, universidades, instituciones de investigación y ONGs. Se prioriza a los grupos indígenas, y el Fondo Amazonia también apoya un proyecto destinado a ayudar a grupos indígenas aislados o contactados recientemente para contrarrestar la presión o las invasiones de actores que quieren destruir la selva tropical. El fondo apoya a los indígenas Wayampi, que patrullan su territorio por medio de GPS y advierten a las autoridades brasileñas sobre

⁶ <https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/klima--og-skogsatsingen/kos-innsikt/brasil/id734166/#brasilsresultaterogutbetalinger>. Noruega ha pagado a Brasil 7,473 millones de NOK [962259.05 USD] entre 2006 y 2015. <https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/klima--og-skogsatsingen/kos-innsikt/brasil/id734166/#brasilsresultaterogutbetalinger>

actividades ilegales. Sin embargo, aunque el gobierno noruego ha expresado una gran confianza en estas iniciativas, en varias ocasiones tuvo que reducir el apoyo por la selva tropical que brinda al gobierno brasileño, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos. Con Jair Bolsonaro como presidente electo, hay motivos para preocuparse por la futura protección de la selva en Brasil.

La ayuda de Noruega para conservar la selva tropical no se puede ver aislada de la larga tradición de ayuda humanitaria de Noruega. El dinero asignado a diversos proyectos de ayuda, y el número de ONGs que reciben fondos del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para Ayuda Humanitaria, Ayuda Popular Noruega, Ayuda de la Iglesia Noruega, la Cruz Roja y Consejo Noruego para Refugiados, ha aumentado significativamente durante las décadas pasadas. Según Tvedt, para 2005, más de 200 organizaciones estaban involucradas con ayudas para el desarrollo y asistencia de emergencia, y recibieron más de 3 mil millones de coronas noruegas en apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, con un total de 3 mil millones de dólares estadounidenses entre 1990 y 2005 (Tvedt, 2007). El sistema de ayuda humanitaria de Noruega se puede caracterizar como parte del "sistema político del sur", que comprende tanto la ayuda al desarrollo como la política exterior orientada a mejorar la situación en el "sur", un subsistema nacional que Tvedt (2007) ha discutido y descrito como el "sistema de ayuda internacional".

La iniciativa climática y forestal está financiada por el presupuesto de ayuda humanitaria. En 2017, Noruega otorgó 4,1 mil millones de dólares en ayuda humanitaria, de los cuales casi 64 millones de dólares fueron para la protección de la selva. Entre 2008 y 2017, el parlamento noruego otorgó casi 3 mil millones de dólares para este propósito. Colombia también es un gran receptor de otros tipos de ayuda noruega, de los cuales en 2017, 3,5 millones de dólares se destinaron a apoyar la ayuda de emergencia, 248 millones de dólares a la buena gobernanza, 31 millones al medio ambiente y la energía, y aproximadamente 2 millones de dólares a los servicios sociales y de salud. Es importante señalar que Noruega está apoyando a Colombia con un presupuesto para el buen gobierno, ya que la estructura del gobierno de Colombia ha respondido inadecuadamente a muchos de los desafíos relacionados con la prevención y el control de la deforestación. La corrupción es uno de los principales flagelos de Colombia, como lo refleja el hecho de que tiene un índice de percepción de la corrupción muy por encima del promedio mundial, clasificándolo como uno de los países más corruptos del mundo (Newman y Ángel 2017). Las acciones que deben tomarse para cumplir con los compromisos adquiridos con los financiadores internacionales pueden no llevarse a cabo en su totalidad, ya que los fondos destinados a ellas están agotados por la corrupción en todos los niveles (El Tiempo 2017). La corrupción no es la única que va en contra del buen gobierno, sino que, al mismo tiempo, la falta de capacidad técnica, de compromiso institucional y de voluntad política hacen que muchas instituciones colombianas no sean efectivas para llevar a cabo las tareas asignadas (Guzmán-Ayala 2017).

Críticas a REDD +

Las críticas a REDD + dividen sus efectos negativos en cuatro categorías, cada una de las cuales tiene una base legal en materia de derechos humanos: 1) apropiación de tierras, conflictos de tierras y violaciones de los derechos consuetudinarios a la tierra, 2) contratos de explotación de carbono y corrupción, 3) marginalización de los pueblos indígenas y habitantes de los bosques, 4) aumento de la pobreza y alteración de los estilos de vida tradicionales basados en los bosques (Raftopolous y Short 2017, p. 170). En 2018, Riksrevisjonen (la Oficina del Auditor General de Noruega) publicó una evaluación de la iniciativa noruega por la selva tropical, y concluyó que los resultados de REDD + en cuanto a la reducción de las emisiones de carbono son atrasados y poco contundentes, que las contribuciones noruegas no han generado suficientes contribuciones de otros actores, que el control de la implementación de REDD + no es lo suficientemente efectivo, que el Ministerio de Clima y Medio Ambiente no es lo suficientemente sistemático en la recopilación y uso de la información sobre el NICFI; y que los otros ministerios no hacen un seguimiento adecuado de las irregularidades en el uso de la ayuda aportada para la selva tropical (Riksrevisjonen 2018).

Con respecto a los resultados poco contundentes y demorados, Riksrevisjonen afirma que los conflictos de intereses y las cambiantes prioridades políticas en los países colaboradores como Colombia, Brasil y Guyana, obstaculizan y retrasan los esfuerzos y los resultados. En cuanto a la falta de control, Riksadvokaten afirma que hay una falta de seguimiento con respecto a la seguridad social y ambiental, como en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la pobreza, y la conservación de los bosques naturales, y que los informes de los países receptores son insuficientes. Finalmente, la medición, el informe y la verificación de las emisiones de carbono son inadecuados, particularmente en Brasil. En cinco de ocho colaboraciones concretas, el pago por las reducciones de emisiones de carbono se retrasa, y la implementación deficiente de REDD + a nivel nacional significa que el fin de la deforestación en un área será reemplazado por la deforestación en otra zona. Grandes cantidades de dinero permanecen en cuentas bancarias en lugar de ser pagadas a países colaboradores debido a su fracaso político para priorizar REDD +.

Si bien Riksrevisjonen es particularmente crítico con la implementación de REDD + y el uso de miles de millones de Noruega en favor de la selva tropical en Brasil, Benjaminsen y Svarstad (2018a) han examinado el éxito de la iniciativa por la selva tropical en Tanzania. El acuerdo con Tanzania fue el primer acuerdo bilateral que surgió del NICFI (Hermansen y Kasa 2014). Presentamos este como un ejemplo empírico, considerando el marco teórico dentro del cual se analizará el caso colombiano más adelante. Benjaminsen y Svarstad calificaron el proyecto REDD sostenido por las autoridades noruegas en Tanzania como especialmente exitoso. Su objetivo es compensar a la comunidad local por la pérdida de acceso al bosque protegido. Benjaminsen y Svarstad argumentan, sin embargo, que el proyecto ha tenido grandes consecuencias negativas para las personas en las aldeas locales que rodean el bosque, afirmando que esto puede considerarse como una forma de

colonialismo climático (Benjaminsen y Svarstad, 2018). Además, son las personas pobres o marginadas en el sur quienes asumen los costos directos de las medidas tomadas para reducir el cambio climático, como el REDD +, en la forma de limitaciones del uso de los recursos naturales y de las áreas. En Tanzania, Benjaminsen y Svarstad (2018), encontraron que tres grupos superpuestos se ven más afectados por las restricciones en el uso de bosques protegidos: personas que viven cerca del bosque protegido sin recursos alternativos cercanos (por ejemplo, leña y tierras de pastoreo); personas con pequeñas fincas o sin tierra, y las mujeres, ya que suelen ser las encargadas de recoger leña para cocinar. Si bien el proyecto de Tanzania se planeó para estimular el desarrollo de políticas forestales nacionales, los cambios políticos en el gobierno de Tanzania aparentemente también frenaron la motivación para desarrollar una estrategia nacional de REDD + viable (Hermansen y Kasa 2014, p. 18), lo que puede ocurrir fácilmente en otros países receptores con gobiernos cambiantes como Colombia y Brasil, donde, por ejemplo, es poco probable que la ideología de Bolsonaro garantice la protección de la selva. Hermansen y Kasa ven esto como una ilustración de los riesgos políticos involucrados en el desarrollo de NICFI.

Resultados de la colaboración noruego-colombiana

En 2016, el gobierno de Colombia (con el apoyo a largo plazo de Noruega) firmó un acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Según el IDEAM, en el mismo año la tasa de deforestación creció en un 44 por ciento. El setenta por ciento de la deforestación en Colombia en 2017 ocurrió en la región Amazónica. La deforestación aumentó en 74,073 hectáreas a un total de 144,147 hectáreas (IDEAM 2018).

Existe una relación directa entre el desarme de las FARC y el aumento de la deforestación (Salazar et al. 2018). Muchos de los problemas relacionados con el uso de la tierra aumentaron debido a que los guerrilleros abandonaron un territorio en el que durante la guerra habían tenido reglas estrictas para controlar la tala, la caza, etc. Cuando se fueron, estas zonas quedaron sin gobierno.

Independientemente de la cooperación internacional emergente para extender las áreas protegidas, el 90 por ciento de la deforestación se llevó a cabo en seis de los parques nacionales más ricos en biodiversidad, como Sierra de la Macarena, Tinigua, Paramillo, Cordillera de los Picachos, La Paya y Nukak. Estos parques nacionales (junto con el Parque Nacional Chiribiquete) forman parte del corredor biológico más extenso de la región biogeográfica Amazónica (Clerici et al. 2018). A pesar de su importancia biológica, este corredor sigue siendo poco estudiado debido a la presencia a largo plazo de grupos armados y la ausencia de control estatal. El IDEAM (2018) afirma que los principales impulsores de la deforestación en estos bosques mega-diversos son: i) el uso como tierra baldía por parte del estado; ii) desafíos en la implementación de acuerdos de paz y cambios en las reglas locales de uso de la tierra (presencia / ausencia de actores armados); iii) inversiones por parte de empresarios privados para llevar a cabo la tala y quema "controlada" en territorios

grandes, incluso en Parques Nacionales; iv) la necesidad de los locales para mejorar la movilidad entre centros de población históricamente aislados; v) flexibilidad de los procesos notariales relativos a la venta de terrenos; vi) intereses territoriales especulativos; vii) programas que sirven como incentivos perversos, que se detallan a continuación.

La minería ha sido declarada "locomotora del desarrollo económico de Colombia", y presentada como una "actividad para mejorar no solo el crecimiento económico sino también el avance social", que se supone genera beneficios sociales para las comunidades locales en las zonas mineras (Agencia Nacional de Minería 2012). El gobierno colombiano ha promulgado leyes que promueven la minería a gran escala en todo el país (Villar et al. 2017). Al declarar la minería como una "actividad de utilidad pública e interés social", ha abierto las puertas a las expropiaciones generalizadas, los desplazamientos forzados y las licencias para operar en áreas protegidas (Goyes, en prensa; Mol 2013; Rojas-Páez 2017). Uno de los principales impulsores de la deforestación en la Amazonía colombiana desde la firma del acuerdo de paz con las FARC es el aumento exponencial (33 por ciento) en las áreas productivas de cultivos de coca, alcanzando 167,400 hectáreas en 2017 (UNODC 2018). El área productiva es una estimación del área de cultivo de coca que ha contribuido a la producción total de hoja de coca durante el período de la encuesta; estos cultivos se plantan en lugares remotos en áreas boscosas, e involucran a comunidades con oportunidades de ingresos limitadas. Las soluciones propuestas para abordar este problema incluyen la erradicación manual forzada y la sustitución voluntaria, y esta última se logra a través de convenios colectivos con las comunidades. A pesar de los altos costos de la estrategia, el territorio cubierto por la erradicación manual corresponde a solo el 5 por ciento del territorio total utilizado para los cultivos de coca (UNODC 2017). En octubre de 2015, el gobierno de Colombia aprobó la suspensión de las operaciones de fumigación aérea de los campos de coca con glifosato. Sin embargo, el actual presidente, Iván Duque, ha planteado la posibilidad de reiniciar la fumigación, a pesar de los efectos perjudiciales sobre la salud humana, la vida silvestre y los ecosistemas que se producirían con esta medida (Del Olmo, 1998). En la Tabla 1 resumimos los indicadores alarmantes de deforestación relacionados con las plantaciones de coca reportados por la UNODC (2018). Las cifras reportadas de erradicación manual para 2016 proporcionadas por el gobierno colombiano se diferencian significativamente de las cifras reportadas por los grupos de erradicación móvil - fuerzas policiales y militares, mostrando mejores resultados que los reales (UNODC 2018).

Tabla 1. Resumen de indicadores según los muestreos de cultivos de coca de la UNODC 2017-2018 antes y después de la firma de la declaración de intenciones conjunta - París 2015, y el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 (Oficina del alto comisionado para la paz, 2016):

Descripción de indicadores	Medida	2014	2015	2016	2017	Fuente
Producción potencial de hidrocloreto de cocaína	Toneladas métricas	564 ^a	797 ^a	1.053 ^b	1.379 ^b	UNODC2017 ^a -2018 ^b
Área de cultivos de coca	Hectáreas	69.132 ^a	96.084 ^a	146.139 ^a	171.000 ^b	UNODC2017 ^a -2018 ^b

Cultivos de coca en tierras indígenas	Hectáreas	7.799	11.837	15.665		UNODC 2017
Cultivos de coca en Parques Nacionales	Hectáreas	5.480	6.214	7.873		UNODC 2017
Fumigación aérea de cultivos de coca	Hectáreas	55.523	37.199	0	0	UNODC 2017
Erradicación manual por los GME*	Hectáreas	5.326	4.905	3.555		UNODC 2017
Erradicación manual reportada ¹	Hectáreas			18.277	52.571	UNODC 2018
Tasa de inscripción lograda en el Programa Nacional de Sustitución (PNIS)	Familias			0	54.027	UNODC 2018
Incautaciones de cocaína	Kilogramos			362.415	435.431	UNODC 2018

*GME: Grupos Móviles de Erradicación – Policía y Fuerzas Militares

¹Cifras reportadas por UNODC en 2018, sin anotaciones que establezcan que los valores se verificaron y actualizaron de manera continua, lo que puede tener un impacto en los datos y las tendencias informadas anteriormente. Así, los valores para el año 2016 en ambos informes difieren significativamente.

Otro incentivo perverso es el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que actualmente enfrenta importantes contratiempos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución. Las familias con un alto número de hectáreas de cultivos de coca fueron priorizadas para el desembolso de beneficios (\$ 350 USD por mes). Por lo tanto, las familias con una hectárea aumentaron sus cultivos a 5 hectáreas para acceder a los beneficios del PNIS, por ejemplo, en la región del Pacífico. Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, así como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informan que “para el 31 de marzo de 2018, 62,182 familias en 43 municipios estaban registradas en el PNIS [pero] solo el 11 por ciento de las familias que participan el programa recibió asistencia” (FIP, 2018). UNODC (2018) afirma que para disminuir la cantidad de cultivos ilegales, las intervenciones deben llevarse a cabo a nivel local y no a nivel municipal, para mejorar los medios de vida en áreas aisladas y remotas donde los grupos armados dominan el territorio. El sistema actual falla al apoyar a los agricultores locales, y aumenta la deforestación cuando los agricultores expanden sus cultivos de coca para recibir beneficios.

El conflicto por la tierra y la lucha armada han aumentado la cantidad de cultivos ilícitos. Este conflicto se ha agravado, entre otras causas, por el despojo (causado por la acción de actores armados como guerrilleros y paramilitares), por la falta de documentos formales para documentar la propiedad de la tierra / formalidad de la tenencia, por el desplazamiento forzado y el abandono voluntario de la tierra para evitar los conflictos armados, y por el cambio de vocación agrícola de la tierra como consecuencia del desplazamiento que expande la frontera agrícola (UNODC 2017). En 2011, el gobierno colombiano implementó

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448, 2011), que proporciona un marco legal para restaurar y formalizar la propiedad de tierras para las víctimas de conflictos armados internos que fueron desplazados de sus territorios (Congreso de Colombia, 2011). La Unidad de Restitución de Tierras es una oficina gubernamental que brinda asistencia para el registro de solicitudes de restitución de tierras y cualquier consejo legal que necesite el solicitante para obtener un título legal de tierras.

Del mismo modo, el Ministerio de Justicia y Ley, en alianza con la UNODC, apoyó la formalización legal de la propiedad de la tierra. La titulación de tierras ha tenido efectos positivos en relación con la industria del aceite de palma en Colombia. El marco legal ampliado en el área de la diversidad cultural y étnica, instituido con la reforma constitucional de Colombia en 1991, ha involucrado la asignación de títulos de propiedad colectivos a las comunidades afrocolombianas e indígenas, lo que establece límites a la expansión de la propiedad privada corporativa (Mol, 2017). Ruiz-Soto (2017), sin embargo, sugiere que la titulación de tierras puede estar acelerando el proceso de deforestación, ya que de acuerdo con las directrices elaboradas por Incora (antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) e Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), para demostrar que un bosque improductivo se está transformando en un área de uso agrícola, es necesario talar dos tercios del bosque en el área solicitada. En otras palabras, se requeriría que el campesino pobre tale el bosque para demostrar una gestión productiva, y así legitime su solicitud de certificación. Ahora, los inversionistas que quieren apoderarse de tierras están pagando a los madereros para que talen el bosque y, como propietarios subsiguientes de las áreas mejoradas, solicitan la formalización del título. Por lo tanto, Ruiz Soto menciona que en la actualidad la Agencia Nacional de Tierras solo otorga títulos para aquellas propiedades que cumplen con su función ecológica, y establece que la participación de estos inversionistas en la deforestación no puede considerarse como un argumento a favor del título. Más bien, debe tratarse como un factor de exclusión (Ruiz -Soto 2017).

La sociedad civil en busca de transparencia: los informes del gobierno colombiano a Noruega

El informe del MADS (octubre de 2017) indica que para 2017, esta entidad esperaba haber completado el establecimiento del sistema de atención ciudadana ENREDD +, pero durante la redacción de este artículo⁷ no se encontró ningún informe de avance de este programa (MADS 2017). El IDEAM ha producido los datos para implementar el Inventario Forestal Nacional (estructura, composición y diversidad florística, biomasa aérea, carbono del suelo, desechos de madera, volumen de madera, calidad y condiciones y dinámica de los bosques del país), y supervisa los informes de deforestación cada tres meses. En términos del progreso en políticas e instrumentos, el MADS informa el establecimiento de la Mesa Redonda Nacional REDD + como una herramienta clave para la participación de los actores en la creación de una coalición público-privada con compañías comprometidas con

⁷ Julio-Noviembre 2018.

políticas ambiciosas de cero deforestación. Se enfoca en el diseño e implementación de la producción agrícola sostenible, mejorando el uso de las tierras ya deforestadas y previniendo nuevas conversiones de bosques para fines agrícolas (MADS 2017). Con respecto a los logros sectoriales, el MADS informa el registro catastral de al menos 130,000 propiedades rurales adicionales a nivel nacional y la declaración de al menos 2.5 millones de hectáreas de áreas protegidas adicionales para la preservación *in situ*. La Unidad para la Restitución de Tierras indica en su informe en línea que al 30 de septiembre de 2018, se habían presentado un total de 117,000 solicitudes de titulación de tierras, pero solo se habían formalizado 6,518 títulos. El segundo informe de MADS (2017a) presenta una lista exhaustiva de logros relacionados con la Modalidad 1, como la creación de legislación adicional (por ejemplo, el Decreto 1257 2017; Ley 1900 2018) (MADS 2017b; Congreso de Colombia 2018) que abordará los objetivos de la Declaración Conjunta, incluido el monitoreo y la evaluación llevados a cabo por agencias como el IDEAM y el DNP, que recopilan datos sobre indicadores claves tanto sociales y económicos como ambientales. El informe describe la finalización de 27 de 63 hitos, incluidos decretos, políticas nacionales, planes de uso de la tierra y planes de vida de las asociaciones indígenas amazónicas, diseño de un sistema de servicio ciudadano ENREDD+⁸ y un aumento en las áreas marinas protegidas (ver MADS 2017, Apéndice 1). En su informe de 2016, Visión Amazonía se centró en la asignación del presupuesto, e indicó que la mayor parte de este presupuesto se comprometió según los acuerdos con las instituciones gubernamentales que implementarían el plan de acción (MADS 2016).

El informe de las Naciones Unidas sobre la participación social en la preparación de REDD + destaca la iniciativa Bosques-Territorios de la Vida, que es la Estrategia Integrada de Control de la Deforestación y Manejo Forestal del Gobierno de Colombia (García 2018). El informe también menciona el desarrollo de una ruta de participación con cuatro fases: (1) diálogos tempranos, información, capacitación y preparación (2010-2016) para mejorar el intercambio de información sobre el cambio climático; (2) información para la construcción de ENREDD + (2016-2017), inicio del diálogo para generar aportes orientados hacia la construcción de ENREDD +, e identificar las causas y agentes de la deforestación, y posibles medidas y acciones; (3) Divulgación y comentarios de ENREDD + (2017) para crear una primera versión del documento de la Estrategia Nacional REDD +; y (4) acuerdos de validación social, política e implementación (sin un plazo establecido), para contar con la validación de la Estrategia de acuerdo con las recomendaciones de los actores (personas directamente involucradas en el uso de bosques y deforestación) y los estándares nacionales (García et al. 2018).

Si bien estos informes pueden parecer alentadores, la realidad en las áreas rurales de Colombia es muy diferente. Esto dio lugar a que un grupo de ciudadanos comprometidos con la defensa del medio ambiente (25 niños, adolescentes y adultos jóvenes) presentaran un caso legal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el derecho a disfrutar de

⁸ Estrategia Nacional de REDD+.

un ambiente saludable. Afirmaron que, a pesar de los compromisos del gobierno colombiano para lograr una reducción de la deforestación, la Amazonía es la región con el mayor número de alertas tempranas de deforestación por parte del público en general. La decisión del tribunal favoreció a los demandantes y ordenó al gobierno colombiano que formule un plan para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía. Además, ordenó la creación del "Acuerdo Intergeneracional para la Vida de la Amazonía Colombiana". En octubre de 2018, la Corte Suprema otorgó al gobierno un período máximo de 5 meses para completar este conjunto de acciones (Tolosa-Villabona 2018). Con la Directiva Presidencial N° 5 (2018) firmada por el ex presidente Santos, el gobierno colombiano proporcionó un plan de acción para la implementación del fallo judicial. Esto aportó detalles sobre lo que se haría a corto, mediano y largo plazo por todos los ministerios, agencias colombianas, fuerzas militares y la policía para cumplir con las responsabilidades gubernamentales relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la emisión de títulos de propiedad para víctimas de conflictos armados, la mejora de los medios de vida locales, como el manejo agroforestal, turismo ganadero y ecoturismo, entre otros, y las operaciones para obstaculizar y destruir rutas de acceso para la extracción y transporte de cocaína, entre otros. El MADS realizó reuniones con las partes interesadas a nivel local, agricultores, comunidades indígenas y autoridades locales desde julio hasta agosto de 2018, con el fin de abordar un diseño participativo para este documento. Estas acciones tomadas por la sociedad civil indican que muchas de las políticas estatales para detener la alta tasa de deforestación que amenaza a Colombia no se realizan, lo que hace que el público reaccione con un movimiento social sin precedentes que ha logrado importantes victorias ante esta falta de acción por parte del Gobierno.

Discusión

Como se ha demostrado, un punto importante relacionado con la deforestación en Brasil y Colombia, es que gran parte de este problema se debe a actividades ilegales (Boekhout van Solinge 2010). Los países involucrados en el NICFI no solo deben encontrar maneras de reducir su propia deforestación legal, sino que también se enfrentan a múltiples formas de criminalidad relacionadas con la tala ilegal de bosques, por ejemplo, para fines agrícolas, así como con la corrupción. Esta corrupción y la falta de capacidad operativa de las autoridades colombianas parecen ser los principales factores que impiden una acción efectiva contra la deforestación.

Los estudios realizados por el IDEAM y otras fuentes proporcionan datos completos sobre la deforestación y sus causas. Más allá de los acuerdos nacionales e internacionales firmados por el gobierno, se deben tomar medidas concretas para detener la tasa de deforestación antes de que se pierdan más ecosistemas claves. Como lo sugiere la UNOCD (2018, pág. 6), "La consolidación de la paz debe ir acompañada de una presencia institucional capaz de proporcionar las condiciones para la seguridad y el estado de derecho. El objetivo principal será facilitar y reforzar el papel del estado y promover actividades de desarrollo rural integrado, reducir las vulnerabilidades y transformar los

territorios de Colombia”. Esto implica el cese de las actividades de uso ilícito de la tierra, como los cultivos ilegales (por ejemplo, la coca), la minería ilegal y la ganadería extensiva, y todas las demás acciones que conllevan a la deforestación.

El gobierno colombiano debe reevaluar las estrategias tradicionales de desarrollo rural que dependen de la explotación insostenible de las áreas forestales (Mol 2013, 2017). Es necesario investigar la viabilidad de prácticas alternativas de uso de la tierra, como la agricultura y producción tropical sostenible que promueve la coexistencia con los bosques, especialmente con respecto a la región Amazónica (Hoffman, 2016). Esto es necesario para garantizar la continuidad de la dinámica compleja entre las tierras altas andinas y las tierras bajas amazónicas que ha influido en el origen y mantenimiento de la biodiversidad neotropical (Clerici et al. 2018).

Se deben poner en marcha la investigación y la acción participativas, integrando el conocimiento ecológico de los pueblos indígenas así como el conocimiento del territorio de los miembros de las FARC reintegrados (Salazar et al. 2018; ver Goyes 2017 en relación con el manejo de semillas). Esto facilitará el estudio de la biodiversidad, dando prioridad a las necesidades locales. Tal como están las cosas, se realizan discusiones y se planifican medidas por parte de los servidores públicos en lugares desconectados tanto física como políticamente de las localidades donde se supone que se implementarán sus planes de acción. Si bien los informes sobre los logros positivos alcanzados por los gobiernos colombianos parecen prometedores y convincentes, esta falta de comprensión de la realidad de las comunidades aisladas y su relación con los bosques tropicales no deja claro si las políticas del gobierno colombiano tienen el valor práctico suficiente para prevenir la deforestación.

Un problema adicional es que una lista de logros que existe solo en el papel no puede garantizar que la financiación se haya invertido en la raíz del problema. El estado no cumple sus promesas con respecto a la sustitución de cultivos, la titulación de tierras y la provisión de medios de vida sostenibles para las comunidades locales que ha descuidado desde el inicio del conflicto armado en Colombia, o con respecto a la evaluación de la situación de las personas afectadas directamente por las medidas de ahorro forestal. En cambio, se destina una considerable cantidad de fondos a los salarios de un número desmedido de funcionarios públicos en las principales ciudades. Por lo tanto, el desafío del nuevo gobierno es restaurar la confianza en el estado y demostrar su compromiso con el proceso de paz y las promesas hechas durante la campaña presidencial sobre la conservación de la región amazónica y su diversidad cultural, social y biológica.

La credibilidad y la transparencia deben estar presentes cuando se informa a los donantes internacionales (como Noruega) que forman parte de la declaración conjunta. Noruega debe, a través de Riksrevisjonen, continuar vigilando de cerca las afirmaciones de éxito de la NICFI respecto de la deforestación evitada por el gobierno colombiano para garantizar que a) se cumplen los requisitos; y b) que al hacerlo, estos no supongan una carga injusta

para los grupos locales, ya que el gobierno colombiano tiene interés en presentar una imagen positiva desproporcionada en lugar de una realidad desalentadora. Del mismo modo que la deforestación a través de la producción de aceite de palma tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y contribuye al aumento de los monocultivos (Mol 2013, 2017; Stretesky et al. 2013), también puede ser parte integral de las prácticas coloniales y neocoloniales, lo que perjudica a los grupos que tradicionalmente han estado en desventaja en Colombia. Por lo tanto, la presión de autoridades distantes que dictan cómo los colombianos deben salvar el bosque, con vastas implicaciones sociales, pueden ser ejemplos de ese mismo neocolonialismo.

Si bien el caso en que la Corte Suprema de Justicia en Colombia dictaminó a favor de los derechos ambientales de los demandantes, y la posterior implementación del Acuerdo Intergeneracional para la Vida en la Amazonía Colombiana son pasos positivos, es urgente que el nuevo gobierno haga un seguimiento de la decisión judicial, y más ampliamente que las personas que viven en la Amazonía y otros lugares expuestos a la deforestación participen activamente en la planificación de cómo prevenirla. La investigación de los críticos de REDD + ha demostrado que su principal objeción se refiere a la falta de participación de los grupos indígenas, lo que socava su autodeterminación (Raftopoulos y Short 2017, p. 172).

El norte y el sur comparten una armonía de intereses en la reducción del cambio climático y la deforestación. Sin embargo, hay diferentes ganancias y pérdidas dentro de Colombia y Noruega, ya que los ciudadanos noruegos no sufren las medidas tomadas en Colombia, pero pueden beneficiarse de la continua explotación petrolera del estado noruego.

Noruega, a través de NICFI, está teniendo éxito en varios aspectos del desarrollo de su imagen, al aparentemente reducir las emisiones de carbono en Colombia, Brasil y otros países del sur, y así puede continuar con su propia política de emisiones de carbono relacionada con la producción de petróleo y gas ambientalmente dañinas, pero al mismo tiempo parece estar a la vanguardia de la protección del medio ambiente natural y la reducción del cambio climático. El valor del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, que se estableció cuando Noruega ingresó a la industria petrolera, asciende a 1,039 mil millones de dólares al 7 de noviembre de 2018⁹. En consecuencia, Noruega tiene los recursos económicos para proporcionar ayuda humanitaria, directa / participativa en las negociaciones de paz, y prevenir la deforestación en el sur. No obstante, la fortuna de Noruega se deriva predominantemente de industrias dañinas para el medio ambiente, como la producción de petróleo y gas, produciendo así un "crimen pardo" (South 2015; White 2011), como la acuicultura de salmón alimentado con soja brasileña producida a través de la deforestación. Noruega importó 670,000 toneladas de concentrado de proteína de soja (RCP) para forraje de pescado en 2016, de las cuales el 94% provino de Brasil (Regnskogsfondet y Fremtiden i våre hender 2017, p. 4). Noruega pretende aumentar

⁹ <https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/>

significativamente su producción de salmón para el año 2050 y continuar con su producción de petróleo y gas.

Ambos países pueden desear continuar con las actividades que impulsan el calentamiento global, en lugar de detenerlo, pero Noruega puede pagar para deshacerse de esa carga. También en el sur hay intereses que no están en armonía; por ejemplo, el estado colombiano puede querer explotar sus recursos minerales, que pueden producir beneficios sociales, pero también pueden producir deforestación y problemas para los habitantes del país. Las personas también pueden intentar explotar para su propio beneficio las acciones estatales para cumplir con sus obligaciones con el acuerdo NICFI, lo que a su vez produce una mayor falta de armonía de intereses a medida que aumenta la deforestación, como se analiza en relación con las plantaciones de coca.

Si bien puede parecer que existe un poder de cambio climático "imperialista" externo en el rico norte que determina las políticas internas del sur, también existen patrones y problemas núcleo-periferia dentro de Colombia, donde los poderes centrales afirman que están tratando de lograr los objetivos de reducir el cambio climático, pero pueden estar actuando en contra de ellos para favorecer intereses privados. De esta manera, estamos presenciando la consecuencia de la dominación de las relaciones de poder y los intereses privados, tanto desde Noruega como internamente en Colombia. (Galtung 1971; Goyes 2017).

Conclusión

Es vital que se salvaguarden los intereses de toda la población colombiana. Debido a que la protección del medio ambiente natural se ha convertido en una actividad que amenaza la vida en América Latina (Human Rights Watch 2018; Lynch et al. 2018), los manifestantes y las personas que se ven directamente afectadas por la deforestación y las medidas adoptadas para evitarla deben ser escuchadas y recibir apoyo. Esto es importante no solo para garantizar los derechos ambientales de los seres humanos, como una extensión de los derechos humanos (White 2013), sino también para salvaguardar su cultura. Sin embargo, salvar el bosque también es importante si se consideran los derechos del medio ambiente, desde una perspectiva no antropocéntrica (White y Halsey 1998; Zaffaroni 2011).

Al preservar los parques nacionales y los bosques, es esencial prestar mucha atención a las injusticias que pueden producir esfuerzos como el NICFI, y a la injusticia que se produce cuando los países ricos se liberan de sus propias obligaciones a través de tales iniciativas. Incluso si una nación está trabajando contra la deforestación a nivel mundial, aún debe reducir las emisiones de carbono a nivel nacional como un paso hacia la justicia eco-global.

A través del NICFI, el norte rico, en lugar de contribuir significativamente a reducir el calentamiento global, dicta las políticas estatales en el sur global para glorificar la propia imagen de los países donantes. Para algunos, estos países pueden ser descritos

legítimamente como neocolonialistas climáticos que pueden causar injusticias a las personas en la periferia (Benjaminsen y Svartad 2018; Galtung 1972). Si bien el bosque está protegido, o quizás más bien parece estar protegido a través de una serie de medidas como se ejemplificó anteriormente, cuando se trata de cultivos para uso ilícito y titulación de tierras, el peligro proviene de lo poco que se hace en la práctica para proteger directamente los bosques y sus habitantes, humanos y no humanos.

Por otro lado, la corrupción en varios niveles, en el caso de Colombia, es un problema de grandes proporciones que impide que se tomen acciones concretas y efectivas para detener la deforestación. Develar aún más estos problemas internos y los efectos de la política de pago para la conservación a los países del sur, debe ser un tema central en los próximos años para una criminología verde del sur. En la actualidad, uno de estos temas centrales es la equidad intergeneracional (Weston 2012; White 2011, 2013), un tema recientemente destacado por la joven activista del clima sueco, Greta Thunberg, líder en huelgas escolares en todo el mundo para protestar contra el calentamiento global. Para imaginar la equidad intergeneracional, argumenta White, se debe prestar atención a los efectos de los actos y políticas perjudiciales, no solo los que nos dañan a nosotros u otros directamente, sino también los que dañarán a las generaciones venideras, ya sean humanos o no humanos. Esto es algo que podemos lograr a través de la exploración del horizonte. Pero no necesitamos explorar el horizonte futuro para ver los daños del cambio climático y la deforestación. El futuro es ahora, el cambio climático está aquí (UN IPCC 2018), y los bosques están cayendo incluso mientras hablamos; ahora es el momento de actuar. Al hacerlo, es necesario enfatizar que los gobernantes deben escuchar a su gente y dejar de favorecer los intereses particulares de los empresarios y las multinacionales, que contribuyen poco a la economía de los países del sur, pero alientan la erosión de sus recursos naturales. La deforestación en Colombia se reducirá y se evitará cuando exista un consenso entre los actores involucrados, y las autoridades gubernamentales tomen medidas efectivas y se deje de lado la defensa de los intereses privados.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia Nacional de Minería. (2012). *Resolución Número 045 de 2012*. Diario Oficial de Colombia.

Beirne, P., and South, N. (eds.). (2007). *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Other Animals and Humanity*. Devon: Willan.

Benjaminsen, T, and Svarstad, H. (2018). Marx i skogen?. Op-ed in *Klassekampen* 22nd May 2018 (Consultado 8 agosto, 2018).

Benjaminsen, T. A., and Svarstad, H. (2018). REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania. *InternasjonalPolitikk*, 76(1), pp. 24–46.

Birdsall et al. (2014). <https://www.cgdev.org/sites/default/files/brazil-norway-agreement-performance-based-payments-forest-conservation-brief.pdf> (Consultado 10 agosto, 2018).

Boekhout van Solinge, T. (2010). Deforestation crimes and conflicts in the Amazon. *Critical Criminology*, 18(4), pp. 263–277.

Brisman, A., South, N. and Walters, R. (2018). Climate Apartheid and Environmental Refugees. In Carrington, K., Hogg, R., Scott, J., and Sozzo, M. (eds.). *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South* (pp. 301–321). Palgrave Macmillan, Cham.

Carrington, K., Hogg, R., and Sozzo, M. (2016). Southern criminology. *British Journal of Criminology* 56(1), pp. 1–20. DOI: 10.1093/bjc/azv083.

Clerici, N., Salazar, C., Pardo, C., Jiggins, C., Richardson, J. and Linares, M. (2018). Peace in Colombia is a critical moment for Neotropical connectivity and conservation: Save the northern Andes–Amazon biodiversity bridge. *Conservation Letters*. 2018; e12594. DOI: 10.1111/conl.12594.

Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1448 de 2011*. Diario Oficial de Colombia, Bogotá, Colombia.

Congreso de Colombia. (2015) *Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”*. Diario Oficial de Colombia, Bogotá, Colombia.

Congreso de Colombia. (2018). *Ley 1900 de 2018*. Diario Oficial de Colombia, Bogotá, Colombia.

Del Olmo, R. (1998). The ecological impact of illicit drug cultivation and crop eradication programs in Latin America. *Theoretical Criminology*, 2(2), 69-78.

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018. Tomo 1. Bogotá, Colombia.

Directiva Presidencia No. 05. (2018). *Articulación institucional para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 4360 2018 del 5 de abril de 2018, relacionadas con la deforestación en la Amazonia*. Presidencia de la República de Colombia. Bogotá, Colombia.

El Tiempo. (2017). *La cruzada para que no se sigan robando al país con corrupción*. Disponible en <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cifras-de-la-corrupcion-en-colombia-61750> (Consultado 30 noviembre 2018).

- Eng, S. (2015). Bistand: De store prosjektenestid. Norgeshistorie.no. University of Oslo. Disponible en <https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1953-bistand-de-store-prosjektenes-tid.html> (Consultado 18 julio 2018).
- FIP - Fundación Ideas para la Paz. (2018). *How is coca crop substitution progressing in Colombia? Implementation lags and pending tasks*. Disponible en <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5b0c6e5c29dfd.pdf> (Consultado 20 junio 2018).
- Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. *Journal of Peace Research* 1971:8, pp. 81–117.
- García, P., Ome, E., Camacho, A., Leguía, D., Yepes, A. and Rodríguez, M. (2018). *La participación social: de la preparación de REDD+ a la construcción de la Estrategia Bosques Territorios de Vida*. Programa ONU REDD. Bogotá, Colombia
- Goyes, D. R. (en prensa). ‘Little development, few economic opportunities and many difficulties’ Climate change from a local perspective. *International journal for Crime, Justice and Social Democracy*.
- Goyes, D. R. (2017). *Biopiracy from a green criminological perspective*. PhD thesis, University of Oslo, Dept. of Criminology and Sociology of Law.
- Goyes, D. R., and South, N. (2015). Land-grabs, Biopiracy and the Inversion of Justice in Colombia. *British Journal of Criminology*, 56(3), pp. 558–577.
- Guzmán-Ayala, A. (2017). *Mediocridad es corrupción*. Ola Política. Disponible en <http://olapolitica.com/opinion/mediocridad-es-corrupcion/> (Consultado 30 noviembre 2018).
- Halsey, M. and White, R. (1998) Crime, Ecophilosophy and Environmental Harm, *Theoretical Criminology*, 2(3), pp. 345–371.
- Hermansen, E. A. T., and Kasa, S. (2014). “Climate Policy Constraints and NGO Entrepreneurship: The Story of Norway’s Leadership in REDD+ Financing.” CGD Working Paper 389. Washington, DC: Center for Global Development. Disponible en <http://www.cgdev.org/publication/climate-policy-constraints-and-ngo-entrepreneurshipstory-norways-leadership-redd> (Consultado 10 agosto 2018).
- Hogg, R., Scott, J., and Sozzo, M. (2017). Southern Criminology: Guest Editors’ Introduction. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 6(1), pp. 1–7.
- Hoffmann, C. (2016). Colombia and the prospect of peace: Is there hope for a slowdown of deforestation in the foothills of the Amazon? An analysis of deforestation patterns and potential preventive measures. Master thesis, Humboldt-Universität Zu Berlin. Berlin, Germany.
- Human Rights Watch (2018). World report 2018. Disponible en <https://www.hrw.org/world-report/2018> (Consultado 12 enero 2019).
- IDEAM - Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales. (2018). *Resultados Monitoreo de la Deforestación 2017*. Disponible en http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Actualizacion_cifras2017+FINAL.pdf/40bc4bb3-370c-4639-91ee-e4c6cea97a07 (Consultado 20 mayo 2018).

- JDI Joint Declaration of Intent. (2015). Disponible en https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kld/kos/joint_declaration_of_inten_t_colombia_norway_germany_uk_redd_in_colobia-002.pdf (Consultado 15 mayo 2018).
- Lundeberg, H. and Grønlund, A.F. (2017).. *Fra brasiliansk jord til norske middagsbord. En rapport om soya i norsk laksefôr*. Fremtiden i våre hender og Regnskogsfondet
- Lynch, M. J., Stretesky, P. B., and Long, M. A. (2018). Green criminology and native peoples: The treadmill of production and the killing of indigenous environmental activists. *Theoretical Criminology*, 22(3), pp. 318–341. DOI: 10.1177/1362480618790982
- Lynch, M. J. and Stretesky, P. B. (2016). *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*. Routledge.
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia. (2016). *Visión Amazonia. Informe anual 2016*.
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia. (2017a). *Segundo reporte de cumplimiento de hitos bajo la modalidad 1 de la declaración conjunta de intención sobre REDD+*. Disponible en http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_participacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2017/2o_Reporte_cumplimiento_hitos_DCI.pdf (Consultado 20 mayo 2018)
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia. (2017b). *Decreto 1257 de 2017*. Diario Oficial de Colombia.
- Mol, H. (2013). ‘A gift from the tropics to the world’: power, harm, and palm oil. In *Emerging Issues in Green Criminology*, pp. 242–260. Palgrave Macmillan, London.
- Mol, H. (2017). Agro-Industry Expansion Through “Strategic Alliances”: The Shifting Dynamics of Palm Oil-Related Dispossession. In Goyes, D.R., Mol, H., Brisman, A., and South, N. (eds.). *Environmental Crime in Latin America* (pp. 163-186). London: Palgrave Macmillan.
- Newman, V. and Ángel, M. (2017). Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. *Cuadernos Fedesarrollo* No. 56.
- Norges internasjonale klima- og skoginitiativ. (2015).** Disponible en <https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kld/kos/statusrapport-2015-norges-internasjonale-klima-og-skoginitiativ.pdf> (**Consultado julio 16 2018**).
- Oficina del alto comisionado para la paz. (2016).** Texto completo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf> (Consultado Febrero 4 2019).
- Raftopoulos, M., and Short, D. (2016). A new benchmark for green criminology. In Hall, M., Maher, J., Nurse, A., Potter, G., South, N. and Wyatt, T. (eds). In *Greening Criminology in the 21st Century: Contemporary Debates and Future Directions in the Study of Environmental Harm*, p. 165.
- Resolución 045. (2012). *Por la cual se declaran y se delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones*. Agencia Nacional de Minas. Bogotá, Colombia.

- Riksrevisjonen (2018). **Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing Dokument 3:10 (2017-2018). Disponible en <https://www.nettavisen.no/nyheter/riksrevisjonen-slakter-norges-bruk-av-235-milliarder-kroner-pa-beskyttelse-av-regnskog/3423487119.html>** (Consultado 17 julio 2018).
- Rojas-Páez, G. (2017). Understanding Environmental Harm and Justice Claims in the Global South: Crimes of the Powerful and Peoples' Resistance. In Goyes, D. R., Mol, H., Brisman, A., and South, N. (eds) *Environmental Crime in Latin America* (pp. 57–83). Palgrave Macmillan, London.
- Ruiz-Soto, J. P. (2017). Titulación motor de la deforestación. *El Espectador*. Disponible en <https://www.elespectador.com/opinion/titulacion-motor-de-la-deforestacion-columna-700293> (Consultado 1 octubre 2018).
- Salazar, A. et al. (2018). The ecology of peace: preparing Colombia for new political and planetary climates. *Frontiers in the Ecology and Environment*. 16(9), pp. 1–7, DOI: 10.1002/fee.1950
- Sollund, R. (2008). *Global Harms: Ecological Crime and Speciesism*. New York: Nova Science Publishers.
- Sollund, R. (ed.). (2015). Critical Criminology - an Agenda for Change. In Sollund, R. (ed). *Green Harms and Crimes: Critical Criminology in a Changing World.*, pp. 1–26. Springer.
- South, N. (2015). Green Criminology, Brown Crime and Problems of Despoiling, Disposal and De-manufacturing in Global Resources Industries. In Wyatt, T. (ed.) *Hazardous Waste and Pollution: Detecting and Preventing Green Crimes*. London: Palgrave.
- Stretesky, P. B., Long, M. A., and Lynch, M. J. (2013). *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology*. Routledge.
- Tolosa-Villabona, L. A. (2018). *Acción de Tutela. Fallo impugnación Sentencia STC4360-2018. Radicación No. 11001-22-03-000-2018-00319-01*. Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de casación civil. Bogotá, Colombia.
- Tvedt, T. (2007). International development aid and its impact on a donor country: A case study of Norway. *The European Journal of Development Research*, 19(4), pp. 614–635.
- UN (2018). IPCC SR1.5. Disponible en http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sr15/sr15_draft.pdf (Consultad 7 noviembre 2018).
- UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2017). *Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016*. Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf (Consultado 20 junio 2018).
- UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Coca Cultivation Survey Report for Colombia 2017. Executive summary*. Integrated System for Monitoring Illicit Crops (SIMCI) Project. Disponible en http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Survey_territories_affected_illicit_crops_2017_Summary.pdf (Consultado 10 octubre 2018).
- Unidad de Restitución de Tierras. (2018). *Estadística de Restitución de Tierras: Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente*. Disponible en <https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras> (Consultado 10 octubre 2018).

Villar, D., Perez-Montes, J. E. and Schaeffer, D. J. (2017). Mining as the “Locomotive” of the Colombian Economy: It’s Real Cost. *Journal of Pollution Effects and Control*. 5(194). DOI: 10.4176/2375-4397.1000194

Weston, B. (2012). The theoretical foundations for intergenerational justice. *Human Rights Quarterly*, 34(1), pp. 251–266.

White, R. (2011). *Transnational Environmental Crime: Towards an Eco-Global Criminology*. London: Routledge.

White, R. (2013). *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*. Bristol, Policy Press.

White, R. (2018). *Climate Change Criminology*. Bristol: Polity Press.

WWF. (2018). *Living Planet Report - 2018: Aiming Higher*. Grooten, M. and Almond, R.E.A.(eds). WWF, Gland, Switzerland.